



Gobernar en la catástrofe

Hay una regularidad que se repite en la historia reciente de Chile: cada gobierno, al iniciar su marcha, ha debido enfrentar algo más que la rutina del poder. No se ha tratado simplemente de administrar lo heredado, sino de responder a circunstancias excepcionales que ponen a prueba no solo la eficacia del Ejecutivo, sino también la densidad moral del liderazgo.

Sebastián Piñera asumió en 2010 con un país devastado por uno de los terremotos más intensos de la historia moderna. La reconstrucción no fue entonces una consigna, sino una urgencia material que atravesaba ciudades enteras. A pocos meses de iniciado su mandato, el derrumbe de la mina San José convirtió el subsuelo en metáfora: un país suspendido entre la desesperanza y la técnica, entre la fragilidad humana y la capacidad colectiva. Más tarde vendrían

el estallido social de 2019 y la pandemia, episodios que pusieron al límite la capacidad institucional del Estado.

Michelle Bachelet, en su segundo mandato, enfrentó también el peso de las catástrofes. Los incendios forestales de 2017 arrasaron más de medio millón de hectáreas entre O'Higgins y La Araucanía, borraron del mapa localidades completas como Santa Olga y obligaron al Estado a desplegar recursos excepcionales, cooperación internacional y una presencia territorial intensiva. No fue solo una tragedia ambiental: fue, sobre todo, una experiencia de vulnerabilidad colectiva.

Gabriel Boric, por su parte, heredó un país fatigado por la polarización, la inseguridad y la incertidumbre económica, debiendo gobernar bajo la presión simultánea de la calle, los mercados y las expectativas de transformación.

Hay en todo ello una constante: gobernar en Chile no ha sido, en las últimas décadas, simplemente diseñar políticas públicas, sino ejercer conducción en medio de escenarios críticos, donde la urgencia desplaza al programa y donde la legitimidad se construye más por la capacidad de respuesta que por la coherencia doctrinaria.

Es en ese contexto donde se sitúan los primeros pasos del presidente electo José Antonio Kast. A diferencia de otros momentos, su llegada al gobierno no ocurre en abstracto ni en un escenario de normalidad institucional. Ocurre bajo el peso inmediato de una tragedia concreta: los incendios forestales que han afectado durante las últimas semanas a amplias zonas del centro-sur del país, consumiendo miles de hectáreas, poniendo en riesgo comunidades completas y exhibiendo, una vez

más, la fragilidad estructural del territorio frente a fenómenos cada vez más frecuentes y devastadores.

Su administración, por tanto, no estará marcada únicamente por el desafío de la seguridad pública, sino también por una tarea urgente de reconstrucción material y humana que exige eficacia, coordinación, presencia estatal y control efectivo del despliegue en el territorio.

Ha señalado con claridad que su prioridad será la seguridad, y es razonable: la violencia cotidiana erosiona silenciosamente la confianza social, y sin confianza no hay vida común posible. Pero los escenarios de catástrofe enseñan que el orden no se impone solo con autoridad. Se construye también con respuesta oportuna, con capacidad logística, con un Estado que llega antes que el abandono.

Los momentos críticos exigen

algo más profundo que la firmeza. Exigen cercanía. Capacidad de llegar a tiempo. De desplegar un aparato público ágil cuando la burocracia se vuelve lenta. De combinar autoridad con humanidad.

Los primeros cien días de un gobierno suelen ser más un relato que un balance, pero hay relatos que nacen desde el suelo mismo de los hechos. La reconstrucción que hoy se abre tras los incendios no es solo un problema de infraestructura ni de presupuesto: es una tarea profundamente humana, urbana y social. Reconstruir viviendas, restituir escuelas, recomponer barrios, reactivar economías locales, devolver dignidad a comunidades fracturadas.

No se trata únicamente de ejecutar programas, sino de comprender el tejido social que se ha roto y que requiere algo más que eficiencia: requiere presencia sostenida y sensibilidad institucional.

Tal vez por eso el desafío más exigente que enfrenta el nuevo



Marco Subercaseaux
Académico del
Magister en Vivienda y
Barrios Integrados

gobierno no está en la agenda política ni en el debate ideológico, sino en algo más silencioso y más complejo: demostrar capacidad de ejecución en el territorio, articular al Estado para que funcione como un cuerpo coherente y no como un conjunto disperso de reparaciones, y sostener en el tiempo una reconstrucción que no sea solo material, sino también colectiva.

No es una prueba de poder. Es, sobre todo, una prueba de responsabilidad con quienes han quedado expuestos cuando todo falla.